

AUDIT • TAX • CONSULTING • LEGAL

Uso ético de IA en la administración de justicia

Ethical use of AI in the administration of justice



Now, for tomorrow





Uso ético de IA en la administración de justicia

El 22 de agosto de 2025, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación una tesis aislada que representa un hito en la evolución de la administración de justicia en México. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito estableció, por primera vez en la historia jurisprudencial mexicana, los elementos mínimos que deben observarse para el uso ético y responsable de herramientas de inteligencia artificial (IA) en procesos jurisdiccionales con perspectiva integral de derechos humanos.

Esta decisión surge de un caso concreto en el que el Tribunal empleó herramientas de IA para calcular el monto de una garantía relacionada con la inscripción de una demanda en los folios reales de inmuebles reclamados, en el marco de un recurso de queja interpuesto contra la decisión de un Juzgado de Distrito en un juicio de amparo indirecto.

¿Qué motivó esta decisión?

Ante la ausencia de regulación específica para el uso de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional, el tribunal realizó un ejercicio de autocontención judicial, adoptando lineamientos para su aplicación responsable. Esta iniciativa reconoce la realidad tecnológica actual y la necesidad de establecer parámetros claros que preserven los derechos fundamentales mientras se aprovechan las ventajas de la innovación tecnológica.

El tribunal fundamentó su decisión tomando como referencia los esfuerzos de regulación a nivel internacional, particularmente las Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial Fiable del Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial de la Comisión Europea, el Reglamento del Parlamento Europeo sobre normas armonizadas en materia de IA, y la Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO.

Ethical use of AI in the administration of justice

On August 22, 2025, an isolated thesis was published in the Federal Judicial Weekly that represents a milestone in the evolution of the administration of justice in Mexico. The Second Collegiate Court in Civil Matters of the Second Circuit established, for the first time in Mexican jurisprudential history, the minimum elements that must be observed for the ethical and responsible use of artificial intelligence (AI) tools in jurisdictional processes with a comprehensive human rights perspective.

This decision arises from a specific case in which the Court used AI tools to calculate the amount of a guarantee related to the registration of a claim in the real estate registry of claimed properties, in the context of an appeal filed against the decision of a District Court in an indirect amparo proceeding.

What motivated this decision?

In the absence of specific regulations governing the use of artificial intelligence tools in the judicial sphere, the court exercised judicial restraint, adopting guidelines for their responsible application. This initiative recognizes the current technological reality and the need to establish clear parameters that preserve fundamental rights while taking advantage of technological innovation.

The court based its decision on international regulatory efforts, particularly the Ethical Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence of the European Commission's High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, the European Parliament's Regulation on harmonized rules on AI, and UNESCO's Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence.



Los cuatro pilares fundamentales para el uso responsable de IA

El tribunal estableció cuatro principios fundamentales que deben regir el uso de inteligencia artificial en procesos jurisdiccionales.

El primer pilar se refiere a la **proporcionalidad e inocuidad**, estableciendo que las herramientas de inteligencia artificial deben utilizarse únicamente en la medida necesaria y adecuada para alcanzar un fin legítimo. Es crucial que su aplicación se limite a facilitar razonamientos numéricos o cálculos técnicos, sin que alcance el razonamiento jurídico en la interpretación o aplicación de las normas. Esta limitación preserva el núcleo esencial de la función jurisdiccional y garantiza que la tecnología actúe como una herramienta de apoyo sin sustituir el análisis legal fundamental.

El segundo principio se centra en la **Protección de Datos Personales**, estableciendo que las personas juzgadoras deben emplear estas herramientas de manera que no se comprometa la protección de datos del expediente judicial. Este principio resulta fundamental para mantener la confidencialidad de la información sensible que maneja el sistema de justicia, requiriendo la implementación de medidas de seguridad robustas y el cumplimiento estricto de los marcos normativos de protección de datos vigentes.

El tercer pilar establece el principio de **transparencia y explicabilidad**, que impone una obligación dual: no solo informar que se utilizan herramientas de IA, sino exponer detalladamente la metodología empleada, los datos utilizados y la forma en que se arribó al resultado. Esta transparencia permite que el procedimiento sea auditado y comprendido tanto por las partes como por los órganos revisores, garantizando la trazabilidad del proceso decisorio y fortaleciendo la confianza en el sistema judicial.

Finalmente, el cuarto principio se refiere a la supervisión y decisión humanas, estableciendo que la tecnología debe operar exclusivamente como auxiliar y nunca como sustituto del juez. La deliberación y la decisión deben mantenerse en el ámbito estrictamente jurisdiccional, preservando la intervención humana como elemento indispensable en la administración de justicia. Este principio garantiza que, aunque la tecnología pueda asistir en procesos específicos, la responsabilidad final y el ejercicio del criterio judicial permanezcan bajo control humano.

The four fundamental pillars for the responsible use of AI

The court established four fundamental principles that should govern the use of artificial intelligence in judicial proceedings.

The first pillar refers to **proportionality and harmlessness**, establishing that artificial intelligence tools should only be used to the extent necessary and appropriate to achieve a legitimate purpose. It is crucial that their application be limited to facilitating numerical reasoning or technical calculations, without reaching legal reasoning in the interpretation or application of the rules. This limitation preserves the essential core of the judicial function and ensures that technology acts as a support tool without replacing fundamental legal analysis.

The second principle focuses on the **protection of personal data**, establishing that judges must use these tools in a manner that does not compromise the protection of data in court records. This principle is fundamental to maintaining the confidentiality of sensitive information handled by the justice system, requiring the implementation of robust security measures and strict compliance with current data protection regulatory frameworks.

The third pillar establishes the principle of **transparency and explainability**, which imposes a dual obligation: not only to report that AI tools are being used, but also to provide detailed information on the methodology employed, the data used, and how the result arrived at. This transparency allows the procedure to be audited and understood by both the parties and the reviewing bodies, ensuring the traceability of the decision-making process and strengthening confidence in the judicial system.

Finally, the fourth principle refers to human oversight and decision-making, establishing that technology should operate exclusively as an aid and never as a substitute for the judge. Deliberation and decision-making must remain strictly within the jurisdiction, preserving human intervention as an indispensable element in the administration of justice. This principle ensures that, although technology can assist in specific processes, ultimate responsibility and the exercise of judicial discretion remain under human control.



Implicaciones para el sistema judicial mexicano

Esta resolución representa un cambio paradigmático en la administración de justicia mexicana. Al establecer estos lineamientos, el tribunal no solo legitima el uso de tecnología de vanguardia en procesos jurisdiccionales, sino que también crea un marco de referencia que otros órganos judiciales pueden adoptar.

La implementación de estas directrices permitirá una modernización gradual y responsable del sistema judicial, optimizando procesos administrativos mientras se preservan las garantías procesales y los derechos fundamentales de las partes.

Esto resulta particularmente relevante en un contexto donde la eficiencia judicial y la reducción de cargas de trabajo son prioridades del sistema de justicia. Los lineamientos establecidos ofrecen una ruta clara para aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial, como la velocidad en cálculos complejos y la precisión en operaciones matemáticas, sin comprometer los valores fundamentales que sustentan el Estado de derecho.

Contexto internacional y mejores prácticas

La decisión del tribunal mexicano se alinea con las tendencias internacionales más avanzadas en materia de justicia digital. Países como Estonia, Singapur y algunos estados de Estados Unidos han implementado sistemas de IA en sus procesos judiciales, siempre bajo estrictos protocolos de supervisión humana y transparencia.

El enfoque adoptado por el tribunal mexicano destaca por su equilibrio entre innovación tecnológica y protección de derechos, estableciendo un modelo que puede servir de referencia para otros sistemas judiciales en América Latina. Sin embargo, el camino de regulación de la IA no solamente debiera partir del sistema judicial o de un precedente, sino que debe nutrirse del trabajo y discusión legislativa y la realidad en constante evolución.

La experiencia internacional demuestra que la implementación exitosa de estas tecnologías requiere un enfoque cuidadoso que considere tanto las oportunidades como los riesgos. Los marcos regulatorios desarrollados en estas jurisdicciones enfatizan consistentemente la importancia de mantener la supervisión humana, garantizar la transparencia y proteger los derechos fundamentales, principios que el tribunal mexicano deberá tomar en cuenta, al integrar IA a sus resoluciones.

Implications for the Mexican judicial system

This ruling represents a paradigm shift in the administration of justice in Mexico. By establishing these guidelines, the court not only legitimizes the use of cutting-edge technology in judicial proceedings but also creates a framework that other judicial bodies can adopt.

The implementation of these guidelines will allow for a gradual and responsible modernization of the judicial system, optimizing administrative processes while preserving procedural guarantees and the fundamental rights of the parties.

This is particularly relevant in a context where judicial efficiency and workload reduction are priorities for the justice system. The established guidelines offer a clear path for leveraging the advantages of artificial intelligence, such as speed in complex calculations and accuracy in mathematical operations, without compromising the fundamental values that underpin the rule of law.

International context and best practices

The Mexican court's decision is in line with the most advanced international trends in digital justice. Countries such as Estonia, Singapore, and some US states have implemented AI systems in their judicial processes, always under strict protocols of human supervision and transparency.

The approach adopted by the Mexican court stands out for its balance between technological innovation and the protection of rights, establishing a model that can serve as a reference for other judicial systems in Latin America. However, the path to regulating AI should not only start with the judicial system or a precedent but should also be informed by legislative work and discussion and the constantly evolving reality.

International experience shows that the successful implementation of these technologies requires a careful approach that considers both opportunities and risks. The regulatory frameworks developed in these jurisdictions consistently emphasize the importance of maintaining human oversight, ensuring transparency, and protecting fundamental rights, principles that the Mexican court must take into account when integrating AI into its decisions.



Desafíos y oportunidades para la implementación

Para las **instituciones judiciales**, esta decisión implica varios desafíos significativos. Será necesario desarrollar programas de formación para personas juzgadoras sobre el uso responsable de herramientas de IA, incluyendo sus limitaciones y alcances. Las instituciones deberán invertir en infraestructura tecnológica que garantice sistemas seguros con protección adecuada de datos y la trazabilidad de los procesos. Asimismo, se requerirá el desarrollo de protocolos de supervisión y mecanismos de control y auditoría que aseguren el cumplimiento de los principios establecidos.

Para los **profesionales del derecho**, esta nueva realidad representa tanto un desafío como una oportunidad. Los abogados deberán familiarizarse con estas nuevas herramientas para poder ejercer efectivamente sus derechos de defensa y comprender los procesos judiciales que las involucren. Se abre también un campo de especialización en derecho y tecnología que demandará profesionales con conocimientos híbridos, capaces de navegar tanto el marco legal como las implicaciones tecnológicas de estos desarrollos.

Para las **partes en procesos judiciales**, estos lineamientos representan un avance significativo en términos de transparencia procesal. Los justiciables tendrán derecho a conocer cuándo y cómo se utiliza IA en sus casos y, además, podrán desarrollar nuevos mecanismos de impugnación que les permitan cuestionar el uso inadecuado de estas herramientas como parte de sus derechos procesales.

Challenges and opportunities for implementation

For **judicial institutions**, this decision poses several significant challenges. It will be necessary to develop training programs for judges on the responsible use of AI tools, including their limitations and scope. Institutions will need to invest in technological infrastructure that guarantees secure systems with adequate data protection and process traceability. Likewise, the development of oversight protocols and control and audit mechanisms will be required to ensure compliance with established principles.

For **legal professionals**, this new reality represents both a challenge and an opportunity. Lawyers will need to familiarize themselves with these new tools in order to effectively exercise their rights of defense and understand the judicial processes that involve them. A field of specialization in law and technology is also opening up, which will require professionals with hybrid knowledge, capable of navigating both the legal framework and the technological implications of these developments.

For **parties to legal proceedings**, these guidelines represent a significant advance in terms of procedural transparency. Litigants will have the right to know when and how AI is used in their cases and will also be able to develop new mechanisms for challenging the inappropriate use of these tools as part of their procedural rights.



Hacia una justicia digital responsable

Esta decisión judicial marca el inicio de una nueva era en la administración de justicia mexicana. La adopción de principios éticos claros para el uso de IA representa un enfoque proactivo que busca aprovechar las ventajas de la tecnología sin comprometer los valores fundamentales del sistema judicial.

La innovación tecnológica y la protección de derechos humanos no son conceptos antagónicos, sino que pueden coexistir bajo un marco normativo adecuado. Este precedente es el inicio para establecer las bases para una transformación digital del sistema judicial que sea tanto eficiente como respetuosa de los derechos fundamentales.

La implementación exitosa de estos lineamientos requerirá una colaboración estrecha entre el Poder Judicial, la academia, el sector tecnológico y la sociedad civil. Solo a través de este esfuerzo conjunto será posible construir un sistema de justicia que aproveche plenamente el potencial de la inteligencia artificial mientras preserva los principios democráticos y el Estado de derecho.

La tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación representa más que una simple resolución judicial; constituye una hoja de ruta para la modernización responsable del sistema de justicia mexicano. Su correcta implementación será crucial para asegurar que México se mantenga a la vanguardia en la adopción de tecnologías emergentes en el ámbito judicial, siempre bajo el marco de respeto irrestricto a los derechos humanos y las garantías procesales.

Esta decisión judicial es una muestra de que la justicia mexicana debe estar preparada para enfrentar los desafíos del siglo XXI, adoptando la innovación tecnológica como una herramienta para mejorar el acceso a la justicia y la eficiencia del sistema judicial, sin sacrificar los principios fundamentales que sustentan el Estado democrático de derecho.

Towards responsible digital justice

This court ruling marks the beginning of a new era in the Mexican justice system. The adoption of clear ethical principles for the use of AI represents a proactive approach that seeks to leverage the advantages of technology without compromising the fundamental values of the judicial system.

Technological innovation and the protection of human rights are not antagonistic concepts, but can coexist under an appropriate regulatory framework. This precedent is the beginning of laying the groundwork for a digital transformation of the judicial system that is both efficient and respectful of fundamental rights.

The successful implementation of these guidelines will require close collaboration between the judiciary, academic, the technology sector, and civil society. Only through this joint effort will it be possible to build a justice system that fully harnesses the potential of artificial intelligence while preserving democratic principles and the rule of law.

The thesis published in the Federal Judicial Weekly represents more than just a judicial ruling; it constitutes a roadmap for the responsible modernization of the Mexican justice system. Its correct implementation will be crucial to ensuring that Mexico remains at the forefront of the adoption of emerging technologies in the judicial sphere, always within the framework of unrestricted respect for human rights and procedural guarantees.

This judicial decision is proof that the Mexican justice system must be prepared to face the challenges of the 21st century, adopting technological innovation as a tool to improve access to justice and the efficiency of the judicial system, without sacrificing the fundamental principles that underpin the democratic rule of law.



En Baker Tilly entendemos que la intersección de la inteligencia artificial y el derecho representa uno de los desafíos más complejos del panorama jurídico contemporáneo.

Nuestro enfoque y experiencia combina el rigor técnico necesario para navegar los nuevos estándares éticos establecidos por el sistema judicial mexicano con la claridad práctica que nuestros clientes requieren para integrar IA de manera responsable en sus procesos empresariales, transformando estas herramientas en un verdadero apoyo operativo y no en una carga adicional.

No dude en contactar a nuestros especialistas en Derecho y Tecnología. Nuestro objetivo es **transformar la incertidumbre regulatoria en oportunidades estratégicas**, ayudando a nuestros clientes a **innovar de manera responsable mientras cumplen con los principios de proporcionalidad, protección de datos, transparencia y supervisión humana** que ahora rigen el uso de inteligencia artificial en el ámbito legal mexicano.

At Baker Tilly, we understand that the intersection of artificial intelligence and law represents one of the most complex challenges in the contemporary legal landscape.

Our approach and experience combines the technical rigor necessary to navigate the new ethical standards established by the Mexican judicial system with the practical clarity our clients require to integrate AI responsibly into their business processes, transforming these tools into true operational support rather than an additional burden.

Please do not hesitate to contact our Law and Technology specialists. Our goal is to **transform regulatory uncertainty into strategic opportunities**, helping our clients **innovate responsibly while complying with the principles of proportionality, data protection, transparency, and human oversight** that now govern the use of artificial intelligence in the Mexican legal field.





Contáctanos / Contact us



Adrián Bueno
Socio Director de Legal
abueno@bakertilly.mx

Oficina corporativa

Insurgentes Sur No. 1787 piso 4,
Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020
Alcaldía Álvaro Obregón,
CDMX, México.

T. (+52) 55 5801 3046



www.bakertilly.mx

Este documento es con fines de divulgación y de carácter informativo, de ninguna manera debe considerarse como una asesoría profesional, ni ser fuente para la toma de decisiones. En caso de tomarse decisiones sobre estos temas, deberán consultarse las disposiciones fiscales y legales que resulten aplicables, así como contar con el apoyo u opinión de un profesionista calificado.

BT CDMX, S.C. trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Now, for tomorrow